

Santiago de Cali, noviembre 21 de 2017

SEÑOR

JUEZ ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD

GUADALAJARA DE (BUGA)

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

DEMANDANTE: PABLO EMILIO MARTINEZ Y/O

DEMANDADO: LA NACION FISCALIA GENERAL DE LA

NACION RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

MARIA TERESA JIMENEZ MEJIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.264.700 de Cali, y Tarjeta Profesional No. 117.969 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando conforme con poder de sustitución, en nombre y representación de los señores **PABLO EMILIO MARTINEZ**, (afectado) **YENNY PATRICIA VILLEGAS V**, (compañera del afectado) quienes actúan en su propio nombre y en representación de su menor hijo, **JORDAN ESTEBAN MARTINEZ V**, **MARIA TERESA MARTINEZ JIMENEZ** (madre del afectado) **JHON FREYMAN SOLARTE MARTINEZ**, **OMAR YESID SOLARTE MARTINEZ**, **HAROLD STIVEN MARTINEZ JIMENEZ**, **JHON FREDDY MARTINEZ JIMENEZ**, **MARIA ALEJANDRA MARTINEZ** ,(hermanos del afectado), quien actúa en su propio nombre y en representación de sus dos hijos **LUISA YADIRA SAAVEDRA M**, y **DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ**, (sobrinos del afectado), conforme con la sustitución de poder acudo ante Usted, para que en el ejercicio del medio de Control de **ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA**, consagrada en el artículo **140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**, solicito que previos los trámites del proceso ordinario con citación y audiencia de la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, y **FISCALÍA GENEERAL DE LA NACIÓN**, los cuales están representados por su director y Fiscal general de la Nación, o por quien haga sus veces, solicito

que previos los trámites del proceso ordinario contencioso administrativo con citación y audiencia del señor Agente del Ministerio Público, se disponga mediante sentencia definitiva que haga tránsito a cosa juzgada las siguientes y/o similares

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERO: Que LA NACION –RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, son responsables administrativa y patrimonialmente por todos los perjuicios ocasionados al señor **PABLO EMILIO MARTINEZ, YENNY PATRICIA VILLEGAS V, JORDAN ESTEBAN MARTINEZ V, MARIA TERESA MARTINEZ J, JHON FREYMAN SOLARTE MARTINEZ, OMAR YESID SOLARTE MARTINEZ, HAROLD STIVEN MARTINEZ J, JHON FREDDY MARTINEZ J, y MARIA ALEJANDRA MARTINEZ, LUISA YADIRA SAAVEDRA M DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ**, por la privación injusta de la cual fue objeto el señor PABLO EMILIO MARTINEZ.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración los demandados paguen a título de indemnización las siguientes sumas de dinero:

POR PERJUICIOS MORALES:

DEMANDANTE	PARENTEZCO	S.M.L.M.V	V/PESOS
PABLO E. MARTINEZ	afectado	100	\$73.771.700
YENNY P. VILLEGAS	compañera	100	73.771.700
JORDAN E. MARTINEZ	hijo	70	51.640.190
MARIA TERESA MARTINEZ	madre	100	73.771.700
JHON F. SOLARTE M	hno	50	36.885.850
OMAR YESID SOLARTE M	hno	50	36.885.850
HAROLD STIVEN MARTINEZ	hno	50	36.885.850
JHON FREDDY MARTINEZ	hno	50	36.885.850
MA. ALEJANDRA MARTINEZ	hna	50	36.885.850
LUISA Y. SAAVEDRA M	sobrina	20	14.754.340
DANIEL A. MARTINEZ	sobrino	20	14.754.340
TOTAL PERJUICIOS MORALES:			\$ 486.893.220

POR PERJUICIOS MATERIALES:

El señor PABLO EMILIO MARTINEZ, estuvo privado de la libertad desde el día 17 de octubre de 2010 de hasta el 24 de agosto de 2011, ha laborado como descargador y en los diferentes oficios varios que se le presentan, conforme con lo establecido en los artículos 1613, y 1614 del Código Civil, en su calidad de afectado la indemnización por perjuicios materiales a título de daño emergente y lucro cesante, teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente para el año de 2010, época en la cual fue privado de la libertad que era de 515.000, los cuales se liquidarán así:

Proporción que ha determinado la Jurisprudencia, en razón a la privación de la libertad de la cual fue objeto el demandante.

- a) Vencido o consolidado,
- b) Futuro o anticipado, aplicando las fórmulas jurisprudenciales.

Teniendo en cuenta los salarios mínimos legales vigentes para los años 2010 y 2011 promedio que podía devengar hasta el día 24 de agosto de 2011 fecha en la cual recobró la libertad y conforme con el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, así como la cláusula del Estado Social de Derecho, estipulado en el artículo 1º. De la Constitución Política, cuando se adolece de pruebas de los ingresos, se aplica el salario mínimo para tenerlo como base en la liquidación, los se liquidarán así:

LIQUIDACION PERJUICIOS MATERIALES PABLO EMILIO MARTINEZ

FECHA LIQUIDACION 17 de octubre hasta el 24 de agosto de 2011		octubre de 2010 hasta el 24 de agosto de 2011	
2010			
OCTUBRE	13 días	\$ 223.167,00	
NOVIEMBRE		\$ 515.000,00	
DICIEMBRE		\$ 515.000,00	
		\$	\$
TOTAL		1.253.167,00	1.253.167,00
2011			

ENERO		\$ 535.600,00	
FEBRERO		\$ 535.600,00	
MARZO		\$ 535.600,00	
ABRIL		\$ 535.600,00	
MAYO		\$ 535.600,00	
JUNIO		\$ 535.600,00	
JULIO		\$ 535.600,00	
AGOSTO	24 días	\$ 428.480,00	
TOTAL		4.177.680,00	\$4.177.680,00
GRAN TOTAL			5.430.847,00

**TOTAL LUCRO CESANTE DEJADO DE PERCIBIR DURANTE EL TIEMPO DE SU DETENCIÓN
\$5.430.847.00 MCTE.**

MATERIALES: (Daño emergente)

SEGUNDO. CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a favor del señor PABLO EMILIO MARTINEZ, la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$5.430.847) mcte, por concepto de PERJUICIOS MATERIALES, en la modalidad de daño emergente.

INTERESES: Los causados desde la fecha del reconocimiento hasta el momento efectivo del pago.

HECHOS Y OMISIONES QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA PRESENTE ACCIÓN.

Constituyen elementos fácticos principales de las pretensiones formuladas de la demanda, los que a continuación se describen y explican de acuerdo con lo manifestado por los demandantes y la historia del proceso penal, así:

1º.- El señor PABLO EMILIO MARTINEZ, estuvo vinculado a una investigación penal según escrito de acusación presentado por la FISCALÍA SEXTA SECCIONAL de la ciudad de Buga (V), por el **delito de HURTO CALIFICADO AGRAVADO EN CONCURSO MATERIAL HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.** De acuerdo con la imputación fáctica, el día 15 de octubre del año 2010 la Dirección de Tránsito y Transportes informe sobre el hurto de dos vehículos tipo camión de placas KUK 828 Y kUM 746 los cuales transportaban electrodomésticos, los mencionados vehículos salieron del municipio de YUMBO (v), con destino a la ciudad de ARMENIA.

Los mencionados vehículos reportaban ubicación a través del equipo de localización satelital, en el municipio de CERRITO (V), corregimiento de la Herradura, posteriormente la empresa que opera el satelital suministro la orientación relacionada con los puntos de reporte registrando velocidad cero para el vehículo de placa KUM 746, que fue hallado en la vía a GUACARÍ GUAVAS (V) en el sitio identificado con la nomenclatura carrera 5 No. 1-85 sitio donde funciona un depósito de madera y en donde encontraron varios de los electrodomésticos hurtados.

2º.- El 16 de octubre de 2010 El Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías en audiencia concentrada se legalizó el procedimiento de captura. En el trámite de la investigación se identificó e individualizó al SR. PABLO EMILIO MARTINEZ y JOHN JAVIER VALENCIA BENITEZ, contra quienes se solicitó y obtuvo orden de captura legalizada en audiencia celebrada por el JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTÍAS del municipio de Guacari siéndole formulada imputación como probables coautores del delito SECUESTRO SIMPLE, en concurso material heterogéneo con el delito de HURTO CALIFICADO AGRAVADO.

El JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, de Buga (V), realizó audiencia de formulación de acusación contra los procesados en el delito ya mencionado el día 13 de diciembre de 2010 declarándola legalmente formulada la acusación en contra del señor PABLO EMILIO MARTINEZ.

En igual sentido el citado Despacho fijó día y hora para realizar la audiencia preparatoria de juicio oral el día 28 de enero de 2011.

3º.- El señor PABLO EMILIO MARTINEZ, estuvo detenido desde el día 17 de octubre de 2010, recobrando su libertad el día 24 de agosto de 2011.

Adelantadas las respectivas audiencias inherentes a la investigación penal contra el sindicado PABLO EMILIO MARTINEZ y otros, el **JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BUGA (V), se pronuncia en SENTENCIA DE FECHA VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2015,** decidiendo absolver al acusado por que no se le logró probar el delito por el cual fue acusado.

La mencionada providencia fue apelada por la Fiscalía quien no sustentó el recurso quedando la citada providencia en firme, al declararse desierto el recurso.

FUNDAMENTOS LEGALES QUE HACEN VIABLE LA PROSPERIDAD DE LA ACCIÓN; Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO LA HOLGURA DE LAS PRETENSIONES.

Como se demostrará con los medios documentales que se aportan a esta demanda, es claro que las entidades demandadas en ejercicio de la administración de justicia incurrieron en responsabilidad directa por privación injusta de la libertad, daños de orden moral y material al representado, al vulnerarse sin escrúpulo alguno el derecho fundamental a la libertad al no imprimirse a la actuación el procedimiento que la legislación penal y procesal penal establecen para este tipo de eventualidades, olvidando los señores funcionarios, que las autoridades están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia, en el caso sub-lite en los derechos y libertades ciudadanas.

Es claro que la NACIÓN –RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN les es imputable el hecho dañino, porque la acción de uno de sus agentes fue la causa jurídica en el apareamiento del mismo hecho y, por ende, la responsabilidad por los daños causados recae en el creador del perjuicio.

Fundamento Constitucional de la Responsabilidad Patrimonial de las Instituciones Públicas.

El artículo 1º., de nuestra Constitución concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular, norma que debe concordarse con el artículo 2º al determinar que ***“las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.***

EL ARTÍCULO 90 de nuestra Constitución Política señala: “ El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”. La última parte de este inciso hace alusión a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas.

La Constitución Política en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge cuando se ha causado un daño antijurídico que le sea imputable.

Además como soporte jurídico a las pretensiones que se reclaman por vía de esta acción, tenemos que la Ley Estatutaria para la Administración de Justicia (Ley 270 de marzo 7 de 1996), instituyó la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios como también de los empleados judiciales, cuando en lo pertinente de su articulado ha establecido lo siguiente:

“DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE SUS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES.

“ARTICULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

ARTICULO 66. ERROR JURISDICCIONAL., Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

ARTICULO 67. PRESUPUESTO DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

I. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

“.....

ARTICULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, **quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación “(...) negrillas fuera de texto).**

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Constitución Nacional, artículos 2, inciso 2º., 6º., 29, 90; Ley 270 de 1996, Ley 1437, Artículos 140, 151, 154, 155, 157, 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y demás normas concordantes con el presente medio de control.

PRUEBAS

Con el propósito de que se tengan en cuenta, decretadas y practicadas, solicito las siguientes:

DOCUMENTALES APORTADAS.

1º.- Acompaño los siguientes documentos con la demanda:

2º.- Poder debidamente otorgado.

3º.- Registros civiles de nacimiento de cada demandante.

4º.- Sustitución de poder.

5º.- Copia autenticada de la sentencia dictada por el Juez Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Guadalajara de Buga.

6º.- Constancia expedida por la Procuraduría del agotamiento del requisito de procedibilidad.

7º.- Igualmente se aporta C. D, para la notificación a la AGENCIA NACIONAL PARA DEFENSA DEL ESTADO.

PRUEBAS A SOLICITAR.

Con todo respeto solicito al señor Juez se sirva escuchar en diligencia de audiencia pública a las personas que a continuación se relacionan todas mayores de edad, y vecinas del Municipio de Guacarí, con el fin de que declaren acerca de las relaciones de afecto del demandante.

1º.- JULIO CESAR ANCHICO ZAPATA, Dirección CRA. 3ª No. 5ª-50 BARRIO ARANJUEZ (GUACARÍ V)

2º.- MARTHA CECILIA SOTO OROZCO, CALLE 6ª No. 3E-65 BARRIO ARANJUEZ (GUACARI V).

3º.- ALVARO ANTONIO VERA, CALLE 6ª No. 3E-79 BARRIO ARANJUEZ (GUACARI V), y

PABLO ANDRES ELVIRA ELVIRA, CALLE 5 No. 3E- 62 BARRIO ARANJUEZ (GUACARI V).

Sírvase librar las correspondientes comunicaciones respectivas.

2º. En igual sentido solicito se sirva librar oficio al JUEZ PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE GUADALAJARA DE BUGA, para que se sirva enviar copia autenticada del proceso penal adelantado en contra del señor PABLO EMILIO MARTINEZ, POR EL DELITO DE: HURTO CALIFICADO AGRAVADO EN CONCURSO MATERIAL HETEROGENEO CON FABRICACIÓN TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES Y RECEPCIÓN.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA.

La cuantía del presente medio de control conforme con lo estipulado en el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se estima en la cuantía de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$5.430.847) MCTE., a que se refieren los perjuicios materiales que dejó de percibir el demandante.

COMPETENCIA

La tiene Usted, por el lugar de ocurrencia de los hechos y por la calidad de las entidades demandadas.

NOTIFICACIONES

A la suscrita apoderada en la Cra. 34. No. 4D-80 EDIFICIO SAN FERNANDO EN CALI, oficina 408
Teléfonos 381.60.85 y 556.07.41 Email: matejimejia@hotmail.com

A los demandados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en el Palacio de Justicia calle 12 con carrera 10 piso 17. www.ramajudicial.gov.co

A la Fiscalía General de la Nación por intermedio del Director Seccional de Fiscalías AVDA.6ª. Norte Dirección Jurídica www.fiscalía.gov.co

A la AGENCIA NACIONAL PARA DEFENSA DEL ESTADO AVDA. CALLE 26 No. 68B-70 BOGOTA
www.defensajuridica.gov.co

Atentamente,

MARIA TERESA JIMENEZ MEJIA

C. C. 31.264.700 de Cali.

T. P. 117.969 CSJ.

